

Decreto 18/2024 por el que se expide la Ley de Bienestar Energético para el Estado de Yucatán

Joaquín Jesús Díaz Mena, Gobernador del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 28, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117, 118 Y 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE LA SIGUIENTE,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERA. El sustento normativo de la iniciativa presentada se encuentra contenido en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 55, fracción XI de la Constitución Política, y 16 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Yucatán, toda vez que dichas porciones jurídicas facultan al Titular del Poder Ejecutivo el derecho de poder iniciar leyes y decretos.

De igual forma, con fundamento en el artículo 43 fracción I inciso b) de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación tiene competencia para estudiar, analizar y dictaminar sobre los asuntos propuestos en la iniciativa, toda vez que versa sobre cuestiones de naturaleza administrativa del Poder Ejecutivo del Estado.

SEGUNDA. Contexto de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. En atención al tema que se plantea en la iniciativa que nos atañe, es conveniente abordar el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación¹, donde se aplicaron reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, así como las leyes reglamentarias emitidas el año siguiente, reformas que en su momento se presentaron como significativas en la historia del sector energético mexicano, al presentar una apertura de par en par de la cadena de valor de las dos industrias (eléctrica e hidrocarburos) a la inversión privada.

¹ Reforma constitucional fue aprobada el 12 de diciembre y fue publicada posteriormente. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de 2013. Página electrónica: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013#gsc.tab=0

Con esa reforma se abrió la posibilidad de que la industria petrolera y eléctrica no se reduzca a dos empresas como únicos oferentes; sin embargo, la propia sala del tribunal supremo, para evitar toda confusión, especificó, que en el caso de los hidrocarburos, las reservas seguían perteneciendo de manera exclusiva a la nación.

Si bien, la reforma puso el punto final a una larga serie de transformaciones institucionales de menor alcance que, desde finales de los años ochenta, las diversas administraciones habían impulsado en aras de modernizar el sector y ponerlo a tono con el proyecto financiero y económico de corte liberal que empezaba a predominar en el país, por distintas razones, no tocaron las piezas fundamentales del sistema energético nacional, eran más bien cambios que no beneficiaron al pueblo.

Con esa reforma energética, no podemos omitir que se crearon mecanismos e instituciones nuevas y ajustó otras piezas para propiciar la apertura de un sector hasta ese momento protegido. En este tenor, estableció dos criterios con el fin de orientar objetivos, estrategias y operaciones en ambas industrias y empresas estatales: 1) la creación de valor (la búsqueda para maximizar el valor de cualquier actividad) en un ámbito de competitividad económica y comercial, 2) el desarrollo sostenible del sector (que genere las condiciones de su propia continuidad y provea un crecimiento económico beneficioso sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones), siendo el segundo principio, donde la reforma juega un papel importante en los aspectos sociales y ambientales asociados con la presencia de infraestructura de los proyectos energéticos en las comunidades, pudiéndose señalar esto como lo más rescatable de esa reforma.

Con este nuevo enfoque, la integración de lo social en la reforma energética de 2013, se inserta el ánimo de otorgar certeza jurídica a las partes, en respetar los derechos humanos y generar un desarrollo acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En otros términos, la nueva legislación, enriquecida con una nueva regulación social, debería ayudar a que las empresas (públicas o privadas) obtuvieran como una “licencia social” para operar. Sin embargo, a la fecha, la implementación de la reforma no ha dado resultados del todo satisfactorios. Los conflictos no han disminuido de manera notable y el entendimiento entre las partes sigue siendo muy complicado.

Como es por todos sabido, tal reforma constitucional en materia energética se impulsó bajo premisas falsas, principalmente las que se hicieron consistir en la falta de recursos económicos suficientes para llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos y de la electricidad, justificando que el Estado mexicano no podía por sí solo extraer los hidrocarburos del subsuelo y de los lechos marinos porque no se contaba con los recursos económicos y la tecnología necesaria para ello, por lo que, desde esa perspectiva era fundamental poner a competir en condiciones de

libre mercado a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad con las empresas petroleras y eléctricas trasnacionales y nacionales.

En ese entonces, desde las izquierdas se rechazó rotundamente esa reforma porque se consideró que implicaba entregar una parte fundamental de la renta petrolera de la nación y porque no había razones suficientes para compartir esa riqueza de todos los mexicanos con empresas extranjeras.

Creación de las Agencias, Comisiones y Direcciones de Energía en los Estados de la República. Con el propósito de no desviarnos del punto, es que además con esas reformas se dio paso a la creación de nuevas instituciones para garantizar la liberalización ordenada y regulada de las actividades relativas a la exploración, explotación, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y petróleo, así como la generación y comercialización de energía en la industria eléctrica, transformando los monopolios como Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, y la Comisión Federal de Electricidad y a sus subsidiarias y filiales, en agentes económicos sujetos a la disciplina del mercado con amplias facultades para realizar asociaciones y actos de comercio tendientes a obtener y mantener su rentabilidad económica.

Por tanto, los órganos reguladores coordinados en materia energética, coexisten administrativamente generando la normatividad y la regulación técnica, vigilando su aplicación, así como el régimen de permisos y autorizaciones, bajo un esquema de control complementario con las autoridades operativas tales como: el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Asimismo, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es importante aclarar que estas no son las únicas autoridades en materia energética a nivel federal; por tanto, son importantes por ser los que se encuentran regulados a nivel constitucional.

En ese sentido, la normativa federal permite una sinergia de coordinación entre los anteriores órganos reguladores mencionados y las Agencias, Comisiones y Direcciones de las entidades federativas en materia de energía, demostrando con ello un papel preponderante para el desarrollo productivo y energético en el país.

La coordinación efectiva entre gobierno federal y las entidades ha propiciado que las actividades de los programas y proyectos realizados sean para beneficio de la sociedad teniéndolas como un común denominador, que está fundado en el ahorro y uso eficiente de la energía; así como en lograr un desarrollo regional integral basado en la perspectiva de la sustentabilidad, es decir, en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, en el cuidado del medio ambiente y en la promoción y utilización de las energías renovables.

Como se ha referido dichas Agencias, Comisiones y Direcciones Estatales de Energía tienen como objetivo la ejecución de acciones tendientes al uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de las energías renovables y el fomento de la cultura del ahorro de la energía en sus respectivas entidades federativas, con el apoyo de las instancias federales, estatales y municipales en la materia. Estas han sido implementadas en diferentes estados del país, tales como, la Agencia de Energía del Estado de Campeche, la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo, la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, la Agencia Estatal de Energía de Puebla, la Agencia Estatal de Energía de Veracruz, la Agencia Estatal de Energía de Zacatecas, la Comisión Estatal de Energía de Baja California, la Comisión Estatal de Energía de Morelos, la Comisión de Energía de Tamaulipas, la Dirección de Energía de Chihuahua, la Dirección de Energía de Durango, la Dirección de Fomento Energético de Nuevo León, la Dirección General de Desarrollo Energético de Quintana Roo, la Dirección de Energía Sustentable de Sinaloa, la Dirección General de Energía de Sonora y la Dirección de Energías Alternativas y Renovables de Oaxaca.

Por lo que se puede advertir, que la implementación de la reforma energética propició la creación de un entorno especializado en coordinación y regulación entre organismos estatales y entidades públicas federales, el cual no ha permitido del todo a las dependencias y entidades estatales acompañar en la transición a un sistema energético basado en la participación de agentes económicos privados.

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas. Es sobre esta vertiente que se destaca la reciente reforma publicada el 31 de octubre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas, sentando como los cambios primordiales el de recuperar y garantizar la soberanía energética, asegurando el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, y preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación; así como proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, entre otros temas.

Esta reforma constitucional supone un replanteamiento significativo de la última reforma constitucional aprobada en 2013, con el potencial de incrementar el control estatal y fortalecer la participación de la CFE en las actividades del sector eléctrico.

No podemos eludir su pronunciamiento al respecto, de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que ha expresado que se continuará invirtiendo en generación eléctrica para apoyar el “nearshoring²” y que el Estado gestionará la infraestructura necesaria para la transmisión y distribución. También ha manifestado

² Nearshoring significa acercar la producción al territorio de consumo. Consultado en la página electrónica: <https://www.economista.com.mx/empresas/Que-es-el-nearshoring-20221108-0093.html>

que se promoverá la asociación con empresas privadas para impulsar la transición hacia energías renovables y que el esquema de inversión en el sector energético se definirá en las leyes correspondientes de la materia.

Es bajo tales premisas, que las entidades federativas deben sumar, para que los esfuerzos del gobierno federal rindan frutos, por tal motivo, Yucatán debe realizar lo propio para dar continuidad al trabajo realizado, e impulsar una política energética sustentable dentro del territorio estatal.

Para impulsar dicha encomienda, la iniciativa de ley presentada por el Gobernador del Estado de Yucatán Joaquín Jesús Díaz Mena, traza una estrategia para tal fin, al presentar un ordenamiento local que regule las atribuciones que permitan desarrollar todas las actividades, en conjunto con las autoridades federales, para transitar a los modelos energéticos y ser parte de los programas nacionales que para tal efecto se dispongan. Atendiendo a lo previamente dicho, se considera una prioridad contar dentro del Estado con un ente administrativo especializado en materia de energía que se denominará Agencia de Energía de Yucatán.

TERCERA. Problemática en materia energética en el Estado de Yucatán. En complemento a lo anterior, es dable mencionar la situación que ha vivido en los últimos años el estado de Yucatán con el tema de la red eléctrica interconectada de México, la cual está dividida en siete regiones de control operadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo conforman el Centro de Control Regional Peninsular (GCR PEN) dentro del Sistema Interconectado de Electricidad (SIN) de México, puntualizado lo anterior, de acuerdo con los registros emitidos para la planeación del desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN, adelante), partiendo del análisis de la demanda y del consumo de electricidad para el mediano y largo plazo, incluyendo las estimaciones de demanda máxima integrada (bruta y neta) y consumo de energía eléctrica, se obtuvo que, en 2023 el consumo neto del SEN fue de 345,439 GWh, incrementándose un 3.5% respecto al 2022. Por su parte, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) creció 3.7% en 2023, siendo un crecimiento mayor en comparación con los años 2021 y 2022; sin embargo, la Dirección General Gerencia de Control Regional Peninsular, (GCR, Peninsular), tuvo el mayor crecimiento en 2023 con 10.2%, seguido de la Noroeste y la Norte con incrementos de 7.3% y 4.9%, respectivamente.

Por tanto, la GCR PEN ocupa el 7.2% del territorio nacional aproximadamente, y se estima que, en 2023, la población de esta región ascendió a 5.2 millones de personas, es decir, el 4.1% del total de los habitantes. Esta atendió al 4.6% de los usuarios finales mientras que, su consumo de energía eléctrica per cápita resultó de 3,052 kWh por habitante. De igual forma operó 0.2 millones de unidades económicas durante 2023, las cuales representan el 4.3% del total del país, según cifras del INEGI. Los principales Centros de Carga provienen de la industria del turismo además de una cementera, una procesadora de aceites y

semillas, así como una embotelladora de cervezas. La captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023 representó el 3.5% del total nacional. El Macroeconómico 2024-2038 estima que, con respecto al PIB nacional en 2023, la GCR PEN representa el 5.1% nacional.

La zona de Mérida, Yucatán, representa el 30.9% de la demanda máxima en la GCR PEN, seguida por Cancún en menor porcentaje con un 25.4% y Riviera Maya con 15.3%. Las zonas que registraron la tasa de crecimiento anual más alta durante 2023 fueron Tizimín con 14.4%, Chetumal con 14.1% y Riviera Maya con 13.5%. Para el periodo 2024-2038, se prevé que el PIB de la GCR PEN tenga un crecimiento promedio anual de 2.6% y que su porcentaje de participación en la economía nacional se mantenga en 5.1% al 2038³.

Es totalmente evidente el aumento de la demanda de electricidad en la Península, lo que refleja la necesidad urgente de resolver las limitaciones de los suministros existentes, tales como problemas de suministro de gas y confiabilidad del sistema, que contribuyen a su elevado costo, debido a la escasez de suministro de gas natural y a la congestión en la transmisión entre la Península y el resto del país, la electricidad es cara y poco confiable; a menudo los generadores locales recurren a alternativas caras y contaminantes por ejemplo, el combustóleo o al gas natural cuando se enfrentan a la escasez. A medida que crecen las necesidades energéticas de la Península, no hay ninguna vía aparente a corto plazo y rentable para aumentar el suministro y la calidad del gas natural hasta los niveles necesarios para satisfacer plenamente la demanda.

Las importaciones de gas natural licuado (GNL) pueden remediar la escasez, pero el precio del GNL es considerablemente más alto que el del gas natural por gasoducto. Aunque el refuerzo y la ampliación de la red de transmisión son necesarios para la región, los ajustes operativos también pueden aportar beneficios al sistema existente. Esta confluencia de retos hace que Yucatán se enfrente a precios de electricidad más altos y a cortes del servicio más frecuentes que otras regiones de México. Ante estos retos, los tres Estados de la Península han elaborado planes energéticos coordinados para transformar su sector energético aumentando el despliegue de tecnologías renovables de gran escala y distribuidas, aplicando programas de eficiencia energética y desarrollando soluciones de transporte sustentable.

La problemática que enfrenta el Estado en el tema de energía, es seria, la propia CFE ha reconocido un déficit de energía en la región durante los últimos años, ante la falta de planificación en la materia. Aunado a lo anterior, se agrega la llegada del Tren Maya, que de acuerdo con cifras de "México Evalúa", la expansión inmobiliaria en el Estado, incrementará un 15% en la demanda de electricidad para los próximos 5 años.

³ Demanda y Consumo 2024-2038, PRODESEN. Datos consultados en noviembre de 2024 de la página electrónica: <https://base.energia.gob.mx/PRODESEN2024/prodesen24-38cap3.PDF>

CUARTA. Descripción de la norma. En razón con lo anterior, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora, nos congratulamos ante la iniciativa de Ley de Bienestar Energética para el Estado de Yucatán, que viene a ser un parteaguas a la problemática que aqueja hoy en día al Estado, esta ley que se compone de un total de 47 artículos, los cuales dividen en 4 títulos; así como 11 disposiciones transitorias, pretende establecer las facultades y atribuciones necesarias para desarrollar todas las actividades, que en conjunto con las autoridades federales, busquen transitar hacia modelos energéticos sustentables.

Por ello esta ley presenta como de orden público e interés general, con objeto de promover y dirigir el desarrollo energético sostenible del Estado, y establecer las bases de coordinación que deberán observar las autoridades estatales y, previo convenio, los municipios para este fin; regular a la Agencia de Energía de Yucatán, como autoridad rectora del desarrollo energético sostenible del Estado; determinar los instrumentos y mecanismos para la planeación y el fomento del desarrollo energético sostenible del Estado; armonizar la relación entre los distintos actores que participen en la ejecución de programas y proyectos para el desarrollo energético sostenible del Estado, e impulsar la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía en el Estado, y fomentar la participación de los sectores público, privado y social, y de la comunidad en las actividades relacionadas.

Creando para lo anterior, un ente administrativo especializado en materia de energía, denominado Agencia de Energía de Yucatán, un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, cuyo objeto sea promover el desarrollo energético sostenible del Estado, y coordinar los esfuerzos institucionales del Poder Ejecutivo para este fin, que intervenga en las diferentes cadenas de valor energético, ya sea promoviendo o fomentando la coinversión público-privada, la formación de mercados, la adopción de nuevas tecnologías, el apalancamiento financiero y la escala, o bien, procesando y atendiendo los impactos social y ambiental que los proyectos federales pueden trasladar a la comunidad estatal, buscando mecanismos y esquemas de mitigación, reducción, compensación o remediación, recurriendo a la mejor tecnología y prácticas innovadoras disponibles.

Así como tutelar los intereses de los habitantes y agentes económicos del Estado, impulsando políticas públicas que busquen consolidar la transición energética, para incidir en los campos donde la reforma energética tiene expresiones y posibilidades que responden a las realidades locales.

A la Agencia, se le fija en la ley sus atribuciones propias en las distintas materias, tales como de Planeación y Programación, de Fomento a la Inversión y Cooperación Institucional, de gestión y seguimiento de proyectos, y de Transición y Eficiencia Energéticas y se establece que estará integrada por una junta de

gobierno, como órgano de gobierno; una dirección general, como órgano de administración; un Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán, como órgano de participación, consulta y vinculación con los sectores público, privado y social, y los Centros Coordinadores para el Desarrollo de Proyectos de Energía, como órganos especializados, de carácter transitorio, conformados para apoyar el diseño, la implementación, el seguimiento o la evaluación de proyectos específicos; así como el desarrollo de acciones de concertación social que garanticen su viabilidad.

Asimismo, se señalan quienes serán las autoridades competentes para aplicar e interpretar la ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, siendo éstas la persona titular del Poder Ejecutivo, la Agencia de Energía de Yucatán, y los municipios, por tanto, se les determina a cada uno sus respectivas competencias para el desarrollo energético sostenible en el Estado.

Para una efectiva coordinación entre el Poder Ejecutivo y los municipios, se menciona que, por conducto de la Agencia de Energía de Yucatán, y los municipios podrán suscribir convenios o acuerdos de coordinación para establecer mecanismos de participación para el diseño, la implementación y el seguimiento de proyectos de energía en el Estado, entre otras acciones de coordinación. A su vez, se relacionan las atribuciones con las que contará la Junta de Gobierno, además de las previstas en el Código de la Administración Pública de Yucatán, y su reglamento.

Para el debido funcionamiento de la Agencia en la ley se prevé las distintas unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus funciones, contemplando entre ellas: una Dirección de Planeación y Programación; una Dirección de Fomento a la Inversión y Cooperación Institucional; una Dirección de Gestión y Seguimiento de Proyectos de Energía; una Dirección de Transición y Eficiencia Energéticas: una Dirección Jurídica; una Dirección de Administración, y una Secretaría Técnica, las cuales a su vez contarán con las subdirecciones, departamentos y demás unidades administrativas de menor jerarquía que establezca el estatuto orgánico de la agencia, de conformidad con su disponibilidad presupuestal.

Asimismo, se considera la integración de un Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán cuyo objeto será formular opiniones y propuestas que contribuyan al desarrollo energético sostenible del Estado, sus atribuciones serán las que determine la junta de gobierno.

También, se prevé la emisión de un Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones, como el instrumento rector de la política estatal en materia de desarrollo energético sostenible y respecto a las acciones de mitigación derivadas de proyectos relacionados con la eficiencia energética, las energías limpias, entre otros, en términos de lo previsto en el artículo 82, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático. La elaboración y aplicación de este

Programa estará a cargo de la Agencia y deberá contener, por lo menos, los elementos previstos en el artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.

También se le encomienda a la agencia, la promoción y realización de proyectos públicos o privados que contribuyan al desarrollo energético del Estado, en especial, de aquellos que prevean el uso de energías limpias. Para ello, se le faculta a la Agencia para emitir opinión, para establecer aquellas zonas de actuación, es decir, respecto de la ubicación de proyectos en materia de energía que se ejecuten en el Estado, de manera que guarden congruencia con el ordenamiento territorial del Estado.

Con el propósito de combatir la pobreza energética y una transición justa en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas del Estado, se dispone en la ley que este se efectuará en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y su reglamento, para tal efecto, el Poder Ejecutivo, por conducto de la Agencia, se coordinará con el Gobierno federal para tal acción.

De igual forma, se propone en la ley que se podrán establecer núcleos de desarrollo productivo en materia de energía en el Estado, cuyo funcionamiento contribuya a consolidar sinergias y cadenas de valor entre las micro, pequeñas y medianas empresas, para el intercambio eficiente, entre los oferentes y demandantes, de bienes y servicios relacionados con el sector energético, así como, en general, la promoción de oportunidades de negocio.

La agencia, en el ámbito de su competencia, y a petición de las personas inversionistas o desarrolladoras de proyectos de energía, podrá brindar asesoría o acompañamiento en la gestión de los referidos proyectos; o la obtención de permisos, autorizaciones, licencias o cualquier otro requisito que se necesite cumplir para la realización de dichos proyectos, con la posibilidad de implementar estrategias o acciones que beneficien, tanto a las personas propietarias de las tierras como al proyecto en sí mismo; así como podrá promover la participación de empresas locales y regionales en la implementación de los proyectos en materia de energía a nivel local.

A través de la misma Agencia, se podrá promover el otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos para impulsar la eficiencia energética y el uso de energías limpias en el Estado. Asimismo, impulsará en coordinación con las instituciones de educación media superior y superior del Estado, el desarrollo de capital humano especializado que responda a las necesidades de la industria energética.

A su vez se prevé que la agencia fomentará que los ayuntamientos adopten medidas análogas en materia de eficiencia energética y uso de fuentes de energía limpias o renovables. Para efectos de lo anterior, y previa solicitud de los ayuntamientos, se podrán celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la

agencia, en los cuales se establecerán los esquemas de asistencia técnica, apoyo financiero y auxilio tecnológico, así como, en general, las acciones estratégicas útiles para obtener una reducción significativa del consumo de energía.

En lo que respecta a las disposiciones transitorias, se señala que la entrada en vigor de la ley será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se menciona que la armonización legislativa, se deberá realizar en un plazo de 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso del Estado de Yucatán, expida las modificaciones necesarias a la legislación estatal.

Para la expedición del reglamento de la ley, se prevé un plazo también de 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, el cual estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal. De igual forma, se deberá emitir por el Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo también de 180 días naturales, contado a partir de la emisión del Plan Estatal de Desarrollo respectivo, el Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones 2024-2030.

En las mismas disposiciones transitorias, se prevén las adecuaciones presupuestales, que para el caso el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá autorizar para que, durante el ejercicio fiscal 2024, y en cumplimiento de la ley, se cree la Agencia de Energía de Yucatán.

En correlación con lo anterior, se señala que el Poder Ejecutivo realizará, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, realizará las asignaciones y transferencias de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que requiera la Agencia de Energía de Yucatán para su conformación y funcionamiento; así como las gestiones legales y administrativas necesarias para transferir a la Agencia de Energía de Yucatán los fondos y fideicomisos relacionados con su objeto que, a la entrada en vigor del decreto, se encuentren vigentes.

En referencia a la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía de Yucatán, que se prevé en la nueva ley, se determina que esta deberá quedar instalada y sesionar, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes, contados a partir del inicio de vigencia de la ley.

Asimismo, el Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán, se señala en los transitorios que este deberá quedar instalado y sesionar, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes, contados a partir del inicio de operaciones de la Agencia de Energía de Yucatán.

También se puntualiza que el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Energía de Yucatán deberá efectuarse de manera previa a la sesión de instalación de la junta de gobierno de la agencia.

Por último, se menciona que la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Energía de Yucatán, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, deberá realizar los trámites necesarios para inscribir a la agencia en el Registro de Entidades Paraestatales que lleva la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con lo previsto en el Código de la Administración Pública de Yucatán y su reglamento.

QUINTA. Análisis sobre la competencia de legislar en el estado de Yucatán, en materia energética. Otro punto relevante a tratar, es el concerniente a la competencia de legislar en el ámbito local sobre la materia energética, en efecto como se desprende del artículo 73 de la constitución federal, es facultad del Congreso de la Unión legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear.

Ahora bien, en el propio artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Federal también faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece de manera general las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Al efecto, establece en su artículo 4o. que la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente de conformidad con la distribución de competencias previstas en esa ley, así como en otros ordenamientos legales. En ese mismo sentido se emitió la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, misma que, entre sus objetivos se encuentra el de garantizar el derecho a un medioambiente sano, mediante la formulación, conducción y evaluación de la política estatal en materia de cambio climático.

Bajo esas premisas, es posible advertir, que la legislación sobre energía en México permite una responsabilidad compartida entre la Federación y las entidades federativas, es decir, si bien la Constitución Política, señala que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de energía eléctrica y nuclear a nivel nacional; también, las entidades federativas pueden participar en la regulación de la energía dentro de sus territorios, siempre y cuando no contravengan las leyes federales, por ejemplo, los Estados pueden establecer normas para la generación y distribución de energía renovable, como la energía solar o eólica, dentro de sus límites territoriales, así como que los municipios pueden fijar un porcentaje correspondiente a los ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica, entre otras.

Lo anterior, se robustece con lo dispuesto en el artículo 7 de la referida Ley General del Equilibrio Ecológico, que indica que le corresponde a las entidades federativas la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal (fracción I), la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación (fracción II), la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (fracción XX), y la atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente les conceda la propia ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación (fracción XXII).

De todo lo expuesto se puede inferir; que el estado de Yucatán tiene amplias facultades para delinear su política estatal en materia de protección y preservación del medio ambiente, así como en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, confirmándose este criterio en los argumentos emitidos en las Controversias Constitucionales 41/2021 y 65/2024.

En efecto, la Ley General para el Cambio Climático, reglamenta las disposiciones de la Constitución en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, siendo que dentro de sus objetivos se encuentra establecer la concurrencia de las facultades de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

En adición con lo anterior, no podemos evitar la propia ley en materia de cambio climático del Estado, equiparando estos ordenamientos como los referentes normativos primordiales del íntimo vínculo que existe entre el cambio climático y el sector eléctrico, en la importancia que tiene el uso de fuentes renovables de energía como parte de las labores de mitigación de los efectos de ese fenómeno.

De lo anterior, se aduce que el desarrollo normativo del sector eléctrico debe, en todo momento, ser armonioso con las políticas públicas en materia medioambiental tendientes a la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo cual invariablemente requiere respetar las facultades de los tres órdenes de gobierno en dicha materia.

Por tal razón, la concurrencia establecida, aplica en la manera en la que intervienen las entidades federativas en esta importante labor para contrarrestar y aminorar los efectos del cambio climático, por lo que con la ley en estudio, se establecen esas bases de coordinación para procurar que se tengan mayores mecanismos e instrumentos que permitan coadyuvar en la generación de nuevas cadenas de energía que tengan un impacto beneficioso en los sectores productivos, la obtención de empleos, eficiencia energética y en, general, todo avance que

impulse las actividades socioeconómicas que atraigan mayores inversiones y hagan de la entidad un polo de inversión y fomenten la llegada de capitales que produzcan crecimiento y bienestar continuo.

Para robustecer lo anterior, nos permitimos plasmar la tesis de cuyo rubro se lee: **FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA LEGISLAR DIRECTAMENTE SOBRE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL**⁴, que en síntesis menciona que los Congresos Locales pueden legislar en algunas materias de manera concurrente con la Federación, reglamentando directamente un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ello implique vulnerarla. Lo anterior es así, porque: 1) no existe algún precepto constitucional o legal que lo prohíba; 2) al tratarse de una facultad concurrente, los Congresos Estatales tienen competencia constitucional para legislar sobre el particular; y 3) lógica y jurídicamente, es innecesario que para ejercer una facultad concurrente, dichas legislaturas tengan que reglamentar un precepto de su propia Constitución. Sin embargo, la ley reglamentaria de que se trate debe: a) constreñirse al ámbito territorial de la entidad federativa; y b) su contenido no debe ir más allá ni pugnar con el precepto constitucional que esté reglamentando.

Por otra parte, también no podemos eludir lo dispuesto en el artículo 27, párrafo sexto, que dispone que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; y que en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.⁵

Por tanto, en el marco del artículo 124 constitucional, permiten concluir que los Estados pueden establecer autoridades en materia energética; y no solo eso, sino disponer regulaciones que, con pleno respeto a las esferas de actuación del marco legal y normativo, permitan una adecuada colaboración con la federación en la materia energética; en especial en lo que se refiere a energías limpias y renovables.

Como es posible advertir, es clara la existencia de atribuciones para las entidades federativas respecto de la materia energética, lo que fundamenta y posibilita la iniciativa de ley.

⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 172218. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXIX/2007. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 200. Tipo: Aislada. Rubro: FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA LEGISLAR DIRECTAMENTE SOBRE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

⁵ CPEUM, artículo 27, párr. sexto: ...Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

Con esto se refuerza la relevancia que tienen los gobiernos estatales de contar con dependencias o entidades especializadas en el sector energético que implementen, vinculen y den seguimiento a las disposiciones legales y normativas en dicha materia, así como a los instrumentos normativos del gobierno federal, y de impulsar puntualmente diversas políticas públicas y acciones para el desarrollo energético en beneficio de la población y crecimiento de los diversos sectores.

Sobre todo porque esto permitirá coadyuvar de manera integral con el proyecto para la nación expuesto por la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien estableció, el impulso a las energías renovables.⁶

Es también notorio que la mayoría de las regulaciones estatales están dirigidas al ámbito medio ambiental, de las energías limpias y renovables. Es decir, a la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, como es el caso de la ley que se propone que es bajo ese mismo enfoque.

Preservación de la autonomía constitucional de conformidad con el artículo 115 constitucional. En atención con lo anterior, no omitimos manifestar, que quienes integramos esta comisión legisladora, consideramos realizar unos planteamientos con el ánimo de dejar más clara la norma y no generar sesgos con respecto a la competencia de legislar en la materia, por lo que se plasmaron cambios a determinadas disposiciones, con el propósito de enfatizar que la Agencia únicamente tendrá entre sus funciones el coordinar y asesorar, en términos que dicte la federación y dentro del ámbito de competencia local, en cuanto a los proyectos de generación transmisión y distribución de energía eléctrica, así como otorgar apoyo a los municipios que así lo soliciten, para la verificación y cumplimiento de la normativa en el otorgamiento de los permisos y autorizaciones que en el ámbito de su competencia municipal deban de otorgar, sin que esta acción se pueda tomar como un tipo de injerencia o vulneración a la autonomía con la que cuentan los municipios, lo anterior en observancia de lo dispuesto en el artículo 115 constitucional.

SEXTA. De todo lo anteriormente vertido, nos manifestamos a favor de la Ley de Bienestar Energético para el Estado de Yucatán, primera ley de energía en la historia del Estado, con la cual se propiciará el bienestar energético de Yucatán, a través de del establecimiento de las bases para la coordinación con el Gobierno federal y el sector privado, así como con los municipios, para impulsar el desarrollo de proyectos que contribuyan a ampliar la oferta energética y a promover el crecimiento económico del Estado, sin comprometer al medioambiente, pero sobre todo para acercar las obras de electrificación y los proyectos de energía a las zonas y comunidades de la entidad, en especial, de aquellas que se encuentren marginadas o con pobreza energética

⁶ Gobierno federal (2024). Cien compromisos para el segundo piso de la cuarta transformación. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/948010/100_compromisos_GobMX_CSP.pdf

Para tal efecto, como se ha señalado, se crea la Agencia de Energía de Yucatán, como la autoridad rectora del bienestar energético en Yucatán, la cual fungirá como órgano de asesoría, consulta, promoción, gestión y enlace para el desarrollo de proyectos energéticos en la entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos suficientemente analizado el proyecto de Ley de Bienestar Energético para el Estado de Yucatán, en tal virtud, con fundamento en los artículos 30, fracción V de la Constitución Política; artículos 18 y 43, fracción I, inciso b) de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 71, fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente proyecto de,

Ley de Bienestar Energético para el Estado de Yucatán

Título primero Disposiciones generales

Capítulo I Objeto de la ley y definiciones

Artículo 1. Objeto

Esta ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto:

I. Promover y dirigir el desarrollo energético sostenible del estado, y establecer las bases de coordinación que deberán observar las autoridades estatales y, previo convenio, los municipios para este fin.

II. Regular a la Agencia de Energía de Yucatán, como autoridad rectora del desarrollo energético sostenible del estado.

III. Determinar los instrumentos y mecanismos para la planeación y el fomento del desarrollo energético sostenible del estado.

IV. Armonizar la relación entre los distintos actores que participen en la ejecución de programas y proyectos para el desarrollo energético sostenible del estado.

V. Impulsar la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía en el estado, y fomentar la participación de los sectores público, privado y social, y de la comunidad en las actividades relacionadas.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de esta ley, se entenderá, en singular o plural, por:

I. Agencia: la Agencia de Energía de Yucatán.

II. Aprovechamiento sustentable de la energía: el uso óptimo de la energía en todos los procesos y las actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.

III. Cadena de valor: el conjunto de actividades, tales como investigación y desarrollo, diseño, fabricación, ensamble, producción de partes, mercadeo, instalación, puesta en marcha, servicio y reciclaje, que un sector industrial realiza para entregar un bien.

IV. Ciudad del conocimiento: el espacio geográfico en el que se integran e interactúan las actividades económicas con las actividades vinculadas con la innovación y la generación de conocimiento científico y tecnológico.

V. Desarrollo energético sostenible: el impacto positivo en el balance estatal de energía, obtenido en virtud de la ejecución de proyectos de energía, con el menor impacto social y ambiental posible.

VI. Eficiencia energética: las acciones que conllevan a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades energéticas de los bienes y servicios que demanda la sociedad, y que, al mismo tiempo, aseguran un nivel de calidad igual o superior respecto de los patrones usuales de consumo.

VII. Energías limpias: las definidas como tales en la Ley de la Industria Eléctrica.

VIII. Energías renovables: las definidas como tales en la Ley de Transición Energética.

IX. Ley: la Ley de Bienestar Energético para el Estado de Yucatán.

X. Núcleo de Desarrollo Productivo: el sistema conformado por empresas pertenecientes a diversos sectores o ramas industriales, ubicadas en una zona geográfica limitada e interrelacionadas mutuamente en torno a ciertos mercados, capitales y tecnologías, para mejorar su competitividad, a través de una dinámica de cooperación y de objetivos comunes, así como del apoyo del sector público.

XI. Parque científico: el espacio físico dotado de infraestructura y administrado por un órgano de gestión, en donde universidades, centros de investigación y otras instituciones de educación superior; empresas, y emprendedores mantienen relaciones formales y operativas sobre bases contractuales, para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología, con el objetivo de transformar los resultados de la investigación y del desarrollo en innovación, así como de alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento.

XII. Poder Ejecutivo: el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán.

XIII. Transición energética: el cambio ordenado y programado hacia el uso de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica, para migrar, de manera sustentable, de fuentes convencionales hacia energías limpias y renovables.

Capítulo II

Autoridades y competencias

Artículo 3. Autoridades competentes

Son autoridades competentes para aplicar e interpretar esta ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones:

- I. La persona titular del Poder Ejecutivo.
- II. La agencia.
- III. Los municipios.

Artículo 4. Competencias de la persona titular del Poder Ejecutivo

La persona titular del Poder Ejecutivo tendrá, en relación con esta ley, las siguientes competencias:

- I. Promover el desarrollo energético sostenible del estado, como política pública para contribuir al crecimiento económico, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y a la protección del medioambiente.
- II. Disponer, dentro del presupuesto anual, así como de los planes, programas y proyectos del Poder Ejecutivo, las medidas y los recursos necesarios para promover el desarrollo energético sostenible del estado, de acuerdo con las propuestas que al respecto le presente la agencia.
- III. Emitir el Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones, de conformidad con esta ley, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, sus reglamentos y las demás disposiciones legales y normativas aplicables.
- IV. Las demás que le confieran esta ley, su reglamento, y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 5. Competencias de la agencia

Corresponde a la agencia, sin perjuicio de las atribuciones dispuestas en el artículo 9 de esta ley:

I. Promover la generación, así como la eficiencia en el uso de la energía, mediante fuentes limpias en el estado, de conformidad con la normativa aplicable en la materia, y previo otorgamiento de los permisos correspondientes por parte de las autoridades federales competentes, y de la celebración de los convenios respectivos.

II. Impulsar la ejecución de programas y proyectos para promover el desarrollo energético sostenible del estado, en aras de la eficiencia energética, en coordinación con los sectores público, privado y social.

III. Fomentar la participación social en la planeación y los beneficios de los proyectos de energía que se desarrollen en el estado, en aras de la eficiencia energética, a través de los mecanismos institucionales que, en su caso, establezcan las autoridades en la materia, en términos de la legislación y la normativa aplicables.

IV. Propiciar el aprovechamiento sustentable de la energía y desarrollar políticas y estrategias para impulsar la eficiencia energética y el uso de energías limpias en el estado.

V. Promover la coordinación entre el Gobierno, las empresas, los centros de educación e investigación, y los demás actores involucrados en el sector energético, para el desarrollo de las capacidades estatales en materia de energía.

VI. Fomentar el otorgamiento de estímulos o incentivos para impulsar la inversión en proyectos de energía limpia y renovable y de eficiencia energética en el estado, así como para impulsar la equidad de género en el sector energético.

VII. Impulsar el progreso científico y tecnológico del sector energético estatal, a través del desarrollo de ciudades del conocimiento y parques científicos que contribuyan a la innovación, así como a la generación, disseminación y uso del conocimiento.

VIII. Participar en la constitución, operación y vigilancia de fondos y fideicomisos para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con lo previsto en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como propiciar la captación de recursos públicos o privados, nacionales o internacionales, que incrementen su patrimonio, dentro del ámbito de su competencia.

IX. Suscribir convenios y acuerdos con los sectores público, privado y social para el ejercicio de las competencias antes referidas y, en general, para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 6. Competencias de los municipios

Para contribuir al desarrollo energético sostenible del estado, la agencia promoverá la firma de convenios con los municipios para que participen en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo anterior de esta ley.

Artículo 7. Coordinación entre el Poder Ejecutivo y los municipios

El Poder Ejecutivo, por conducto de la agencia, y los municipios podrán suscribir convenios o acuerdos de coordinación para los siguientes fines:

I. Establecer mecanismos de participación para el diseño, la implementación y el seguimiento de proyectos de energía en el estado.

II. Coordinarse con las autoridades competentes para proponer la construcción, ampliación o modernización de infraestructura física que contribuya a la ejecución de proyectos de energía en el estado.

III. Propiciar la homologación y simplificación de los trámites y procedimientos administrativos relacionados con la obtención de los permisos, las autorizaciones o las licencias que se requieran para la ejecución de proyectos de energía en el estado.

IV. Desarrollar esquemas que faciliten la ejecución de proyectos de energía en zonas con alto potencial de aprovechamiento sustentable de la energía en el estado, particularmente, en lo referente a la adecuación y compatibilidad de usos de suelo.

V. Establecer mecanismos de coordinación o apoyo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el otorgamiento de las autorizaciones de uso de suelo relacionadas con proyectos de energía en el estado.

VI. Crear y consolidar núcleos de desarrollo productivo en materia de energía en el estado, y promover el encadenamiento con permisionarios o contratistas del sector energético.

VII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en proveedores organizados en cadenas productivas relacionadas con la industria energética.

VIII. Formar y profesionalizar capital humano en materia de energía o carreras afines, e impulsar su incorporación en el mercado laboral del estado.

IX. Brindar asesoría técnica para el aprovechamiento sustentable de la energía, impulsar la eficiencia energética y, en general, el cumplimiento de esta ley.

X. Los demás que, a consideración de las partes, se estimen necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Título segundo
Agencia de Energía de Yucatán

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 8. Naturaleza y objeto

La agencia es un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, cuyo objeto es promover el desarrollo energético sostenible del estado, y coordinar los esfuerzos institucionales del Poder Ejecutivo para este fin.

Artículo 9. Atribuciones de la agencia

Para el cumplimiento de su objeto, la agencia tendrá las siguientes atribuciones:

A. En materia de Planeación y Programación:

I. Formular la política estatal en materia de desarrollo energético sostenible, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las prioridades nacionales y las necesidades particulares de Yucatán.

II. Vigilar que los planes, programas y proyectos de las autoridades del Gobierno del estado con atribuciones en materia de energía se encuentren alineados con la política estatal en materia de desarrollo energético sostenible; emitir opinión al respecto, y proponer las medidas que, en su caso, estime conducentes para establecer dicha alineación.

III. Elaborar el Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones, en términos de lo previsto en esta ley, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, la Ley General de Cambio Climático, la Ley del Cambio Climático del Estado de Yucatán y demás disposiciones en cuanto a la competencia estatal en la materia.

IV. Proponer a los Gobiernos municipales estrategias para que sus políticas y programas guarden congruencia con los objetivos y las metas definidos en el Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones.

V. Fungir ante el Congreso del Estado de Yucatán, cuando este así lo solicite, como órgano consultivo para la elaboración de proyectos legislativos relacionados con el sector energético estatal.

VI. Promover el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan conocer, entre otros aspectos, el estado, el potencial, las necesidades y los retos del sector energético estatal.

VII. Generar y compilar información técnica para la toma de decisiones en materia de energía.

VIII. Identificar y difundir buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de desarrollo energético sostenible, mediante la creación de contenido digital e impreso, tanto técnico como informativo, y el desarrollo de otras actividades de promoción.

IX. Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito energético, con énfasis en el aprovechamiento sustentable de la energía.

X. Promover, en coordinación con las autoridades competentes y las instituciones académicas y de investigación, el diseño y la implementación de planes y programas de estudio de nivel superior que respondan a las necesidades del sector energético estatal e impulsen la equidad de género en este sector; así como la formación de capital humano especializado en materia de energía.

XI. Elaborar, en su caso, en coordinación con las autoridades competentes y los sectores privado y social, la matriz energética del estado, con el objetivo de contar con una representación cuantitativa de la totalidad de energía que utiliza la entidad, para indicar la incidencia relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía.

B. En materia de Fomento a la Inversión y Cooperación Institucional:

I. Promover la atracción de inversión pública o privada, tanto nacional como internacional, para la ejecución de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del sector energético estatal.

II. Instrumentar mecanismos para identificar y acceder a fuentes de financiamiento o capitales relacionados con el objeto de la agencia.

III. Proponer a las autoridades competentes la aplicación de instrumentos económicos, fiscales y financieros para el fortalecimiento del sector energético estatal.

IV. Fungir, en el ámbito de su competencia, ante los sectores público, privado y social, como órgano de asesoría, consulta, promoción, gestión y enlace en materia de energía, de conformidad con la normativa aplicable.

V. Servir de enlace entre el sector privado y las instituciones encargadas de la política energética del país, para el trámite de permisos y el cumplimiento de la normativa aplicable en la ejecución de proyectos de energía en el estado.

VI. Gestionar ante las autoridades competentes, o bien, contratar la elaboración de los estudios o las evaluaciones que se requieran para el cumplimiento de su objeto.

VII. Apoyar a empresas y emprendedores en el diseño y la implementación de proyectos de investigación y desarrollo en materia de energía, en especial, de aquellos que promuevan el aprovechamiento sustentable de la energía en el estado.

C. En materia de gestión y seguimiento de proyectos:

I. Proponer a las autoridades federales, las instituciones encargadas de la política energética del país y los demás entes públicos competentes la ejecución de proyectos para el desarrollo del sector energético estatal, a través de los instrumentos jurídicos y mecanismos de asociación pertinentes.

II. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia y previa firma de los convenios respectivos, con el Gobierno federal, las empresas públicas del estado y el sector privado, según corresponda, en la ejecución y el seguimiento de proyectos en materia de energía, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones legales y normativas aplicables.

III. Actuar como ente público consultor y dar su opinión, previa solicitud de la autoridad competente en la materia, para la contratación y el desarrollo de proyectos integrales de inversión a largo plazo en materia de energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la ley estatal aplicable.

IV. Planear, presupuestar, administrar, ejecutar y evaluar, por sí o a través de terceros, proyectos y obras que contribuyan al cumplimiento de su objeto.

V. Realizar los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios que requiera para el cumplimiento de su objeto, en términos de la legislación aplicable.

VI. Participar en empresas de propósito específico que tengan por objeto promover las actividades económicas relacionadas con el sector energético, de conformidad con legislación aplicable.

VII. Participar con otras entidades federativas en la planeación, la implementación y el seguimiento de proyectos de energía regionales, previa suscripción de los convenios respectivos.

VIII. Identificar, con base en datos y cifras oficiales emitidos por las autoridades competentes, las zonas o comunidades del estado que requieran programas o acciones estatales de construcción, ampliación, conservación,

mantenimiento o modernización de infraestructura eléctrica, como medida para reducir los índices de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.

IX. Colaborar con las autoridades competentes en la identificación de las necesidades energéticas de las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, así como de las comunidades rurales y pesqueras del estado, para el diseño y la ejecución de programas y proyectos específicos que contribuyan a la atención de tales necesidades.

X. Participar en la elaboración y actualización de los programas de movilidad del estado, y promover que consideren el enfoque de electromovilidad y, en general, de movilidad sostenible.

XI. Fomentar, en coordinación con las autoridades competentes, la ejecución de programas y proyectos en materia de electromovilidad.

XII. Administrar y actualizar un catálogo de proveedores especializados en materia de energía, y llevar registro específico de los proveedores locales vinculados con el sector energético, a efecto de promover su incorporación en las cadenas de valor relacionadas con dicho sector.

El catálogo deberá ser compartido con la Secretaría de Administración y Finanzas para la coordinación integral del padrón de proveedores en la entidad.

D. En materia de Transición y Eficiencia Energéticas:

I. Promover ante las autoridades federales competentes la celebración de convenios o acuerdos de coordinación derivados de la Ley de Transición Energética.

II. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo, en coordinación con las autoridades competentes, la regulación de contribuciones, subsidios o estímulos fiscales estatales que promuevan el uso de energías limpias y renovables y la eficiencia energética.

III. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo la consolidación de la demanda energética del Poder Ejecutivo, para generar ahorros y mejorar el suministro de energía; y realizar ante las autoridades competentes, en su caso, las gestiones necesarias para tal efecto.

IV. Fomentar entre los sectores productivos y la comunidad, en general, la concientización sobre el aprovechamiento sustentable de la energía, la eficiencia energética y el uso de las energías limpias y renovables.

V. Impulsar, en coordinación con las autoridades federales competentes, la ejecución de programas y acciones de energías limpias o renovables que permitan proporcionar energía a comunidades aisladas o dispersas del estado que no tengan la posibilidad de contar con servicios de energía tradicional.

VI. Apoyar, en el ámbito de sus atribuciones, a las autoridades competentes en la identificación y, en su caso, aplicación de las medidas necesarias para prevenir y restaurar los daños medioambientales ocasionados por la ejecución de proyectos de energía y el desarrollo de actividades de electrificación en el estado, previa firma de los convenios respectivos.

VII. Ejercer aquellas facultades que, en materia de eficiencia energética y energías limpias, correspondan al estado en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción XXIV, de la Ley de Transición Energética, conforme a los requisitos y las especificaciones que al respecto se señalen en las disposiciones legales y normativas aplicables, y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones derivadas de los convenios de coordinación federal, en términos de la Ley de Transición Energética, y de los convenios con los municipios en la materia.

VIII. Contribuir al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia, previo convenio con la federación y demás autoridades competentes, en términos de la Ley de la Industria Eléctrica.

IX. Contribuir al desarrollo de proyectos de exploración y extracción, así como de transporte y distribución por ductos y de almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia, previo convenio con la federación y demás autoridades competentes, en términos de la Ley de Hidrocarburos.

Artículo 10. Integración de la agencia

La agencia estará integrada por los siguientes órganos:

I. Una junta de gobierno, como órgano de gobierno.

II. Una dirección general, como órgano de administración.

III. Un Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán, como órgano de participación, consulta y vinculación con los sectores público, privado y social.

IV. Los Centros Coordinadores para el Desarrollo de Proyectos de Energía, como órganos especializados, de carácter transitorio, conformados para apoyar el diseño, la implementación, el seguimiento o la evaluación de proyectos específicos; así como el desarrollo de acciones de concertación social que garanticen su viabilidad.

Artículo 11. Patrimonio

El patrimonio de la agencia estará conformado por:

I. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán.

II. Los recursos que le asignen o transfieran el Gobierno federal, el Gobierno estatal o los Gobiernos municipales.

III. Los bienes muebles e inmuebles, y derechos que adquiera mediante cualquier título legal.

IV. Los ingresos que perciba por su operación y la prestación de los servicios a su cargo.

V. Las utilidades, los rendimientos, los intereses y los dividendos que obtenga de sus bienes y derechos.

VI. Las donaciones, herencias o legados que se otorguen a su favor.

VII. Los demás recursos, bienes y derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones.

Para el cumplimiento de su objeto, la agencia administrará y dispondrá libremente de su patrimonio, sin perjuicio de las disposiciones legales y normativas aplicables a los organismos públicos descentralizados.

Artículo 12. Domicilio legal

La agencia tendrá su domicilio legal en el municipio de Mérida, Yucatán. Lo anterior, con independencia de que pueda establecer oficinas o representaciones en otros municipios, de conformidad con la disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio.

Artículo 13. Régimen laboral

Las relaciones laborales entre la agencia y sus personas trabajadoras, con independencia de la naturaleza de contratación, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

Artículo 14. Normas supletorias

En lo referente a la agencia, a falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará, de manera supletoria, y en lo conducente, el Código de la Administración Pública de Yucatán y su reglamento.

Capítulo II Junta de gobierno

Artículo 15. Atribuciones de la junta de gobierno

Además de las previstas en el Código de la Administración Pública de Yucatán, y su reglamento, la junta de gobierno contará con las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la agencia y su programa anual de trabajo, a propuesta de la persona titular de la dirección general de la agencia.

II. Validar el contenido del Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones, a propuesta de la persona titular de la dirección general de la agencia.

III. Definir los objetivos, las metas y las prioridades de la agencia.

IV. Decidir sobre el uso y destino de los recursos autorizados para la agencia y, en su caso, la aplicación de ingresos excedentes.

V. Aprobar los ajustes presupuestales que no requieran autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas, en términos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y de las demás disposiciones aplicables.

VI. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera.

VII. Aprobar las disposiciones y los criterios para racionalizar el gasto administrativo de la agencia, y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad.

VIII. Aprobar el estatuto orgánico de la agencia.

Artículo 16. Integración de la junta de gobierno

La junta de gobierno estará integrada por:

I. La persona titular del Poder Ejecutivo, o la persona que ésta designe, quien ejercerá la presidencia.

II. Las personas titulares de cada una de las siguientes dependencias o entidades de la Administración Pública estatal:

- a) Secretaría General de Gobierno.
- b) Secretaría de Administración y Finanzas.
- c) Consejería Jurídica.
- d) Secretaría de Infraestructura para el Bienestar.
- e) Secretaría de Fomento Económico y Trabajo.
- f) Secretaría de Desarrollo Sustentable.
- g) Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.
- h) Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.

Las personas integrantes de la junta de gobierno participarán en las sesiones con derecho a voz y voto.

Cada persona integrante de la junta de gobierno, con excepción de la persona que ocupe la presidencia, quien será suplida por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, designará por escrito a una persona suplente. Las personas suplentes tendrán derecho a voz y voto, y participarán en las sesiones de la junta de gobierno con las facultades y obligaciones que correspondan a sus titulares.

Los cargos de las personas integrantes de la junta de gobierno, y de sus suplentes, serán de carácter honorífico. Por lo tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución o emolumento alguno por su desempeño.

La junta de gobierno contará con una persona que fungirá como Secretaria de Actas y Acuerdos. Esta persona será designada por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno y participará en las sesiones de la junta de gobierno con derecho a voz, pero no a voto.

La persona titular de la dirección general de la agencia será invitada permanente de la junta de gobierno y participará en sus sesiones únicamente con derecho a voz.

Capítulo III **Dirección general**

Artículo 17. Nombramiento y remoción

La persona titular de la dirección general de la agencia será nombrada y removida libremente por la persona titular del Poder Ejecutivo.

Artículo 18. Requisitos

Para su nombramiento, la persona titular de la dirección general de la agencia deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 75 del Código de la Administración Pública de Yucatán, además:

I. Contar con título profesional en áreas o materias relacionadas con Energía, Economía, Ciencias Políticas, Gobierno o Administración Pública.

II. Contar con experiencia laboral mínima de tres años en el servicio público, ya sea federal, estatal o municipal; o en empresas relacionadas con el sector energético.

Artículo 19. Facultades y obligaciones

Además de las previstas en el Código de la Administración Pública de Yucatán, y su reglamento, la persona titular de la dirección general de la agencia contará con las siguientes facultades y obligaciones:

I. Administrar y representar legalmente a la agencia.

II. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la agencia, para dar cumplimiento a las competencias y atribuciones que le correspondan en términos de esta ley.

III. Presentar denuncias ante la autoridad competente cuando tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos.

IV. Proponer a las autoridades competentes a nivel estatal, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de reformas constitucionales, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y cualquier otra normativa.

V. Organizar o participar en congresos, convenciones, foros o cualquier otro evento análogo relacionado con el objeto de la agencia.

VI. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno que le correspondan.

VII. Ejercer el presupuesto de la agencia con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como elaborar el anteproyecto de presupuesto que corresponda.

VIII. Elaborar y presentar a la junta de gobierno, para su aprobación, el estatuto orgánico, los manuales de organización y de procedimientos y servicios de la agencia y sus programas;

IX. Nombrar y remover libremente a las personas servidoras públicas de la agencia que ocupen los cargos de la jerarquía inmediata inferior a la suya.

X. Suscribir, en su caso, los contratos individuales y colectivos que regulen las relaciones laborales de la agencia con sus personas trabajadoras.

XI. Proporcionar la información y documentación que le solicite la persona comisaria pública o la persona titular del órgano de control interno.

XII. Presentar a la junta de gobierno el informe de desempeño de la agencia, así como el informe del ejercicio de su presupuesto y los estados financieros que correspondan.

XIII. Informar la junta de gobierno sobre el ejercicio de las facultades que le correspondan.

XIV. Las demás que establezcan esta ley u otras disposiciones legales y normativas aplicables, o que la junta de gobierno le delegue.

Artículo 20. Unidades administrativas

Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la agencia contará, por lo menos, con las siguientes unidades administrativas:

- I. Dirección de Planeación y Programación.
- II. Dirección de Fomento a la Inversión y Cooperación Institucional.
- III. Dirección de Gestión y Seguimiento de Proyectos de Energía.
- IV. Dirección de Transición y Eficiencia Energéticas.
- V. Dirección Jurídica.
- VI. Dirección de Administración.
- VII. Secretaría Técnica.

Las unidades administrativas referidas en este artículo estarán adscritas a la dirección general y contarán con las subdirecciones, departamentos y demás unidades administrativas de menor jerarquía que establezca el estatuto orgánico de la agencia, de conformidad con su disponibilidad presupuestal.

La agencia podrá crear los Centros Coordinadores para el Desarrollo de Proyectos de Energía que considere necesarios para garantizar la viabilidad de proyectos específicos. Estos centros estarán orgánicamente adscritos a la agencia y contarán con el personal técnico, operativo y administrativo que autorice la junta de gobierno. Las atribuciones y funciones de los centros serán las que establezca el estatuto orgánico de la agencia.

Artículo 21. Estatuto orgánico de la agencia

El estatuto orgánico de la agencia establecerá las disposiciones específicas que regulen su organización y funcionamiento, así como las atribuciones de las unidades administrativas que la integren.

Capítulo IV

Control interno y vigilancia

Artículo 22. Órgano de Control Interno

La función de contraloría interna en la agencia será desempeñada por un Órgano de Control Interno, al frente del cual estará la persona contralora, designada en términos del artículo 46, fracción XVI, del Código de la Administración Pública de Yucatán. En el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la persona contralora será auxiliada por las personas titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, quienes serán designadas en los mismos términos.

Las personas servidoras públicas a que se refiere el párrafo anterior de este artículo ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

Artículo 23. Órgano de Vigilancia

La agencia contará con un Órgano de Vigilancia, integrado por una persona Comisaria Pública propietaria y una persona suplente, ambas designadas por la Secretaría de la Contraloría General conforme al artículo 117 del Código de la Administración Pública de Yucatán, con todas las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones de vigilancia, en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables.

Capítulo V

Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán

Artículo 24. Objeto

El Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán tiene por objeto formular opiniones y propuestas que contribuyan al desarrollo energético sostenible del estado.

El Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán tendrá las atribuciones que determine la junta de gobierno en las disposiciones que al efecto emita.

Artículo 25. Integración

El Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán estará integrado por:

- I. La persona titular de la dirección general de la agencia, quien ejercerá la presidencia.
- II. Una persona representante de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Congreso del Estado de Yucatán.

III. Una persona representante de la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Yucatán.

IV. Tres personas presidentas municipales.

V. Una persona representante de la Secretaría de Energía o de alguna de las instituciones encargadas de la política energética del país.

VI. Una persona representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VII. Dos personas especialistas internacionales en materia de energía, ya sean del sector público, privado o social.

VIII. Tres personas representantes de instituciones académicas y de investigación, especialistas en materia de energía.

IX. Tres personas representantes de empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de energía.

X. Tres personas representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social esté relacionado con la energía o el medioambiente.

La persona titular de la presidencia nombrará a la persona titular de la secretaría técnica del consejo, quien participará en las sesiones únicamente con derecho a voz.

Las personas representantes a que se refieren las fracciones II a la X de este artículo se integrarán al consejo previa aceptación de la invitación que al efecto les extienda la persona titular de la presidencia, de conformidad con las disposiciones que al respecto emita la junta de gobierno. Se procurará que el consejo esté integrado de forma paritaria.

Las personas integrantes del consejo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, y no recibirán retribución alguna por el desempeño de su cargo.

Artículo 26. Sesiones y cuórum

El consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán sesionará conforme a su calendario de sesiones ordinarias. Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus personas integrantes.

Artículo 27. Reglamento interno

El reglamento interno del consejo deberá establecer lo relativo a la organización y el desarrollo de las sesiones, las formalidades de las convocatorias y las facultades de quienes lo integran.

Título tercero
Marco de atribuciones estatales

Capítulo I
Planeación en materia de energía

Artículo 28. Objetivos

El Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones será el instrumento rector de la política estatal en materia de desarrollo energético sostenible y respecto a las acciones de mitigación derivadas de proyectos relacionados con la eficiencia energética, las energías limpias, entre otros, en términos de lo previsto en el artículo 82, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, y la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán y tendrá los siguientes objetivos:

- I. Valorar el potencial energético del estado.
- II. Definir las políticas y prioridades que rijan el desarrollo energético sostenible del estado y las acciones de mitigación en la materia.
- III. Determinar los objetivos y las metas que orienten la planeación, programación y presupuestación de las actividades relacionadas con el desarrollo energético sostenible del estado y las acciones de mitigación.
- IV. Establecer mecanismos de coordinación y concertación con el Gobierno federal, los Gobiernos municipales, los permisionarios y los demás titulares de los derechos de las tierras.

La aplicación del Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones estará a cargo de la agencia, con la intervención que, en su caso, corresponda a las autoridades estatales competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 29. Elaboración

La elaboración del proyecto de Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones corresponderá a la agencia, de conformidad con las bases y los lineamientos que para tal efecto establezca la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.

La agencia deberá convocar a participar en los trabajos de elaboración del proyecto de Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones a las autoridades estatales con atribuciones en materia de energía, a personas representantes de instituciones académicas y de investigación, especialistas en materia de energía y medioambiente, y a las demás personas representantes de los sectores público, privado y social cuyas opiniones y propuestas, a consideración de la agencia, pudiesen ser de utilidad para el proyecto.

Artículo 30. Contenido

El Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones deberá contener, por lo menos, los elementos previstos en el artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.

Capítulo II Proyectos de energía

Artículo 31. Proyectos

La agencia, en coordinación con las autoridades competentes, promoverá la realización de proyectos públicos o privados que contribuyan al desarrollo energético del estado, en especial, de aquellos que prevean el uso de energías limpias.

Artículo 32. Establecimiento de Zonas de Actuación

La agencia podrá emitir opinión, previa solicitud de las autoridades competentes, respecto a la ubicación de proyectos en materia de energía que se ejecuten en el estado, de manera que guarden congruencia con el ordenamiento territorial del estado.

Artículo 33. Electrificación de comunidades y zonas

En términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y su reglamento, el Poder Ejecutivo, por conducto de la agencia, se coordinará con el Gobierno federal para la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas del estado, según se establezca en los convenios respectivos.

Artículo 34. Núcleos de desarrollo productivo

La persona titular de la dirección general de la agencia podrá establecer núcleos de desarrollo productivo en materia de energía en el estado, cuyo funcionamiento contribuya a consolidar sinergias y cadenas de valor entre las micro, pequeñas y medianas empresas, para el intercambio eficiente, entre los oferentes y demandantes, de bienes y servicios relacionados con el sector energético, así como, en general, la promoción de oportunidades de negocio.

El reglamento de esta ley establecerá las disposiciones conforme a las cuales se constituirán y funcionarán los núcleos de desarrollo productivo en materia de energía en el estado.

Artículo 35. Acompañamiento en la ejecución de proyectos

La agencia, en el ámbito de su competencia, y a petición de las personas inversionistas o desarrolladoras de proyectos de energía, podrá brindar asesoría o acompañamiento en la gestión de los referidos proyectos; o la obtención de permisos, autorizaciones, licencias o cualquier otro requisito que se necesite cumplir para la realización de dichos proyectos, con la posibilidad de implementar estrategias o acciones que beneficien, tanto a las personas propietarias de las tierras como al proyecto en sí mismo.

Además, la agencia, en su carácter de enlace, para salvaguardar los derechos de las partes involucradas en la realización de los proyectos de energía, podrá sugerir la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias y de otros medios de solución jurídica, en términos de las leyes aplicables.

Artículo 36. Licencia social en la ejecución de proyectos

La agencia, previa solicitud, en coordinación con las autoridades estatales competentes y los municipios, previo convenio, podrá brindar apoyo a los sectores privado y social para el cumplimiento de la obligación dispuesta en la legislación federal con respecto a la atención de los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades, en relación con los lugares del estado en donde se pretendan ejecutar proyectos de energía.

Artículo 37. Mitigación de externalidades sociales y ambientales

La agencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en coordinación con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y, previa solicitud de las autoridades competentes, podrá emitir opinión respecto a las medidas necesarias para mitigar las externalidades sociales y ambientales que se originen como resultado de la ejecución de proyectos de energía en el estado.

Artículo 38. Acciones voluntarias de desempeño ambiental

La agencia podrá participar con las autoridades competentes y los agentes económicos en la promoción de acciones voluntarias de desempeño ambiental que mejoren los estándares obligatorios, según las normas federales aplicables, en apoyo de las personas inversionistas o promotoras interesadas en la ejecución de proyectos de energía en el estado.

Capítulo III

Proveedores locales y regionales

Artículo 39. Promoción de proveedores locales

La agencia, dentro del ámbito de su competencia, promoverá la participación de empresas locales y regionales en la implementación de los proyectos en materia de energía a nivel local.

Capítulo IV

Apoyos, estímulos e incentivos

Artículo 40. Desarrollo de infraestructura

La agencia, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y en coordinación con las autoridades competentes, promoverá el otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos para impulsar la eficiencia energética y el uso de energías limpias en el estado, de conformidad con la normativa aplicable.

De igual manera procederá la agencia, en coordinación con las instituciones de educación media superior y superior del estado, para el desarrollo de capital humano especializado que responda a las necesidades de la industria energética.

Artículo 41. Cumplimiento de metas de eficiencia energética

La agencia promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales para los sujetos obligados a pagar contribuciones locales que cumplan con las metas establecidas en materia de eficiencia energética y uso de fuentes de energía limpias o renovables, en términos de la legislación en materia de cambio climático, el reglamento de esta ley y las demás disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 42. Agenda energética

Para impulsar el cumplimiento del Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones, la agencia promoverá con los municipios, previo convenio, la realización de una Agenda Energética que, entre otros fines, facilite modelos de producción o de consumo energético sustentados en tecnología pertinente y en una estructura financiera viable y transparente, de conformidad con el reglamento de esta ley.

Artículo 43. Premios y reconocimientos

Como medida para impulsar el desarrollo energético sostenible en el estado, la agencia podrá otorgar premios y reconocimientos a los entes públicos, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos que se destaquen en el aprovechamiento sustentable de la energía o la eficiencia energética, así como en el desarrollo de acciones comunitarias relacionadas con el acceso a la energía o la capacitación o concientización en materia energética.

Los premios y reconocimientos a que se refiere este artículo se sujetarán a las Reglas de Operación que para tal efecto emita la agencia, en términos de disposiciones legales y normativas aplicables.

Título cuarto Transición y eficiencia energéticas

Capítulo I Uso de energías limpias

Artículo 44. Desarrollo de cadenas de valor de energías limpias

En el marco de los convenios que para tal efecto celebre con el Gobierno federal, la agencia promoverá, en función de su disponibilidad presupuestal y de la posibilidad de acceder a fondos de carácter federal o local, acciones de apoyo al desarrollo de cadenas de valor en la industria eléctrica de las energías limpias, en condiciones de sustentabilidad económica.

Para efectos de los convenios a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, la agencia someterá a aprobación del Gobierno federal, al menos, las siguientes medidas de promoción:

I. La generación de instrumentos financieros y crediticios específicos.

II. El otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos a favor de pequeñas y medianas empresas, para el desarrollo de cadenas de valor, conforme a los mecanismos disponibles que establezcan las autoridades federales o estatales competentes.

III. La inversión en desarrollo y transferencia de tecnología en los consorcios creados para tal fin.

Capítulo II

Uso eficiente de la energía en el sector público

Artículo 45. Lineamientos administrativos

La agencia expedirá lineamientos administrativos de carácter obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, los cuales determinarán, entre otros aspectos, las medidas preventivas y correctivas, las metas y los indicadores en materia de eficiencia energética y uso de fuentes de energía limpias o renovables, conforme al programa anual de mejora que establezca cada ente público, en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables.

Para la implementación individual por cada área de consumo de energía, ya sea de electricidad o combustibles, las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal deberán designar a un enlace, que tendrá a su cargo el seguimiento del programa anual de mejora del ente público de su adscripción y la entrega de la información que le solicite la agencia, en términos del reglamento de esta ley.

La agencia fomentará que los ayuntamientos adopten medidas análogas en materia de eficiencia energética y uso de fuentes de energía limpias o renovables, en términos de este artículo. Para efectos de lo anterior, y previa solicitud de los ayuntamientos, se podrán celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la agencia, en los cuales se establecerán los esquemas de asistencia técnica, apoyo financiero y auxilio tecnológico, así como, en general, las acciones estratégicas útiles para obtener una reducción significativa del consumo de energía. Para el cumplimiento de dichos convenios o acuerdos, los ayuntamientos podrán constituir comités de evaluación o designar enlaces, en los que se designarán responsables de la información.

La agencia fomentará que los órganos de administración de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos del estado establezcan lineamientos para promover la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía limpias o renovables, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 46. Metas de ahorro de energía

Las metas de ahorro de energía se fijarán para instalaciones y edificaciones destinadas a la prestación de servicios públicos, flotas vehiculares y equipos y aparatos consumidores de energía, y deberán reportarse periódicamente a la agencia, para efectos de conocer el monto y alcance del ahorro presupuestal y de energía, el cual deberá calcularse en unidades de energía efectivamente obtenidas, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 47. Valor financiero de la reducción de la huella de carbono

El valor financiero de la reducción de la huella de carbono obtenida por la racionalización del consumo energético de la Administración Pública estatal, así como el proveniente, en su caso, de las medidas de reducción adoptadas por Poderes, organismos constitucionales autónomos y municipios deberá ser calculado y capitalizado por la agencia en emisiones de bióxido de carbono equivalente para efectos del desempeño ambiental y del mercado, si los hubiese. La identificación, el registro y el cálculo de estos valores se realizarán en términos de la legislación y la normativa federal en la materia.

Artículos transitorios

Primero. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Segundo. Armonización legislativa

El Congreso del Estado de Yucatán deberá expedir las modificaciones necesarias a la legislación estatal, dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Tercero. Expedición del reglamento

El Poder Ejecutivo deberá expedir el Reglamento de la Ley de Bienestar Energético para el Estado de Yucatán en un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Cuarto. Emisión del Programa Especial de Energía 2024-2030

El Poder Ejecutivo deberá emitir el Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones 2024-2030 en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la emisión del Plan Estatal de Desarrollo respectivo.

Quinto. Adecuaciones presupuestales

Se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que, durante el ejercicio fiscal 2024, y en cumplimiento de este decreto, realice las adecuaciones presupuestales necesarias para crear la Agencia de Energía de Yucatán.

Sexto. Transferencia de recursos

El Poder Ejecutivo realizará, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, las asignaciones y transferencias de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que requiera la Agencia de Energía de Yucatán para su conformación y funcionamiento.

De igual manera, el Poder Ejecutivo deberá realizar las gestiones legales y administrativas necesarias para transferir a la Agencia de Energía de Yucatán los fondos y fideicomisos relacionados con su objeto que, a la entrada en vigor de este decreto, se encuentren vigentes.

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el cumplimiento de este artículo transitorio.

Séptimo. Instalación de la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno de la Agencia de Energía de Yucatán deberá quedar instalada y sesionar, a más tardar, en un plazo de treinta días naturales contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Octavo. Instalación del consejo

El Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán deberá quedar instalado y sesionar, a más tardar, en un plazo de treinta días naturales contado a partir de la instalación y primera sesión de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía de Yucatán.

Noveno. Estatuto orgánico

La Junta de Gobierno de la Agencia de Energía de Yucatán deberá expedir su estatuto orgánico en un término que no exceda de treinta días naturales contado a partir de su instalación.

Décimo. Nombramientos y designaciones

El nombramiento de la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Energía de Yucatán deberá efectuarse de manera previa a la sesión de instalación de la junta de gobierno de la agencia.

Décimo primero. Registro de Entidades Paraestatales

La persona titular de la Dirección General de la Agencia de Energía de Yucatán, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, deberá realizar los trámites necesarios para inscribir a la agencia en el Registro de Entidades Paraestatales que lleva la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con lo previsto en el Código de la Administración Pública de Yucatán y su reglamento.

Décimo segundo. Referencia

Con respecto a la referencia en la Ley de Bienestar Energética para el Estado de Yucatán, de *“las instituciones encargadas de la política energética del país”*, se entenderá por aquellos nuevos órganos, dependencias, entidades o unidades que la federación establezca en la materia.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES DE 1918” DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.- PRESIDENTA DIPUTADA NEYDA ARACELLY PAT DZUL.- SECRETARIO DIPUTADO ÁLVARO CETINA PUERTO.- SECRETARIO DIPUTADO FRANCISCO ROSAS VILLAVICENCIO.- RÚBRICAS”

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido cumplimiento.

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 28 de noviembre de 2024.

(RÚBRICA)

**Mtro. Joaquín Jesús Díaz Mena
Gobernador del Estado de Yucatán**

(RÚBRICA)

**Mtro. Omar David Pérez Avilés
Secretario General de Gobierno**